

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS



PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, SON OBLIGATORIAS LAS LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO.

TOMO CXXV

Núm. 83 Zacatecas, Zac., sábado 17 de octubre del 2015

SUPLEMENTO

4 AL No. 83 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2015

DECRETO No.419.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a enajenar en calidad de donación un bien inmueble a favor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

ACUERDO.-A/02/2015 de la C. Dra.Leticia Catalina Soto Acosta, Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas, por el que se emite los Lineamientos para la Aplicación de Criterios de Oportunidad.

ACUERDO.-A/03/2015 de la C. Dra.Leticia Catalina Soto Acosta, Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas, por el que se emite los Lineamientos para la Aplicación del Procedimiento Abreviado.



DIRECTORIO

ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

Lic. Miguel Alonso Reyes
GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

Lic. Uriel Márquez Cisterna
COORDINADOR GENERAL JURÍDICO

Andrés Arco Pastaje
RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN

El Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas se publica de manera ordinaria los días Miércoles y Sábados.

La recepción de documentos y venta de ejemplares se realiza de 8:30 a 15:30 horas en días hábiles.

Para la publicación en el Periódico Oficial se deben de cubrir los siguientes requisitos:

Lista de Verificación:

- * El documento debe de ser original.
- * Debe contar con sello y firma de la dependencia que lo expide.
- * Que la última publicación que indica el texto a publicar, tenga un margen de dos días a la fecha de la Audiencia cuando esta exista.
- * Efectuar el pago correspondiente a la publicación.

Para mejor servicio se recomienda presentar su documento en original impreso y en versión digital con formato word para windows.

Domicilio:
Calle de la Unión S/N
Tel. 9254487
Zacatecas, Zac.
email: andres.arco@sazacatecas.gob.mx

LIC. MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES, Gobernador del Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:

Que los DIPUTADOS SECRETARIOS de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:

DECRETO # 419

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA

RESULTANDO PRIMERO.- El día 29 de junio del presente año, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Legislatura, oficio número 356/2015, suscrito por el Secretario General de Gobierno y el Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado, con fundamento en lo establecido por los artículos 133 fracción II y 143 inciso B de la Constitución Política del Estado; 22 fracciones I y XIV, 24 fracción VIII y 37 fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 27, 28 y 29 de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios; 5 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno; así como 7 fracción XI del Reglamento Interior de la Coordinación General Jurídica, en el que remiten Iniciativa de Decreto para que se autorice, al Gobierno del Estado, abrogar el Decreto No. 544 expedido por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, autorización que fuera publicada en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado en fecha 16 de octubre del año 2010, en el que enajena en calidad de donación un inmueble con superficie de 9,369.53 metros cuadrados, a favor de la persona jurídica colectiva denominada Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción A. C. (ICIC) con destino a la construcción del Centro de Formación Especializada (CEFES). Sin embargo, al no haberse concretado la formalización de la enajenación autorizada por el Decreto 544, se autoriza sustitución del inmueble enajenado por otro ubicado entre las Calzadas Solidaridad y de los Deportes a favor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

RESULTANDO SEGUNDO.- Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa fue turnada para su trámite, mediante memorándum 1384 de fecha 6 de julio de 2015, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen correspondiente.

El Ejecutivo del Estado sustenta su iniciativa, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"PRIMERO.- Mediante Decreto número 544, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, en el mes de septiembre del año 2010 autorizó al Titular del Poder Ejecutivo a enajenar bajo la modalidad de Donación, un inmueble ubicado en Calzada Vetagrande S/N en Guadalupe, Zacatecas con superficie de 9,369.53 metros cuadrados, a favor de la persona jurídica colectiva denominada Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción A.C. (ICIC) con destino a la construcción del Centro de Formación Especializada (CEFES).

SEGUNDO.- A través del Oficio ZAC/086/2012, el Presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, comunica al Gobierno del Estado que al momento de realizar los trámites del traslado de dominio, la Dirección de Catastro y Registro Público manifiesta que existe una variación entre las medidas consideradas en el Decreto 544, y las medidas que efectivamente constituyen el terreno, con lo que se afecta de manera considerable el terreno materia de la enajenación autorizada.

TERCERO.- Que al no haberse concretado la formalización de la enajenación autorizada en el Decreto 544, el Gobierno del Estado retoma la solicitud planteada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, derivado del compromiso que tiene con el sector educativo y científico de fomentar la creación de capacidades internas para la innovación en áreas estratégicas para el desarrollo local, estatal y regional. Por tal motivo, ha dispuesto la sustitución del inmueble enajenado mediante el Decreto multicitado, por otro ubicado entre las Calzadas Solidaridad y de los Deportes, área que cubre en igual medida las expectativas que cuenta con los servicios de cabecera necesarios, además de encontrarse en lugar de fácil acceso.

La propiedad del inmueble el Gobierno del Estado la adquirió mediante Acuerdo expropiatorio publicado en el Periódico Oficial bajo el número 87 de fecha 29 de octubre de 1983, y se trata de un polígono de 11-11-55.82 hectáreas, mismo que se encuentra dado de alta en el número 134, folio 51 del Volumen 90 de Escrituras Públicas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Del polígono descrito anteriormente, se desmembrarán 9,419.911 metros cuadrados, que se ubica entre las Calzadas Solidaridad y de los Deportes, superficie solicitada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Zacatecas, para la construcción de un Centro de Capacitación permanente, el terreno señalado sustituirá al predio que fuera autorizado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, en fecha primero de septiembre del año 2010 a través del Decreto 544, y cuenta con las medidas y colindancias siguientes:

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN						
LADO		RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS	
EST	PV				Y	X
				907	826.303	1,207.558
907	912	N 43°10'18.44" W	28.28	912	846.929	1,188.208
912	300	N 37°44'36.35" W	9.09	300	854.118	1,182.643
300	1058	N 36°55'41.07" E	30.75	1058	878.701	1,201.119
1058	1059	S 60°27'07.31" E	6.42	1059	875.533	1,206.708
1059	1060	S 61°18'45.33" E	9.04	1060	871.193	1,214.639
1060	1061	S 60°54'37.93" E	5.11	1061	868.711	1,219.100
1061	1062	S 69°21'10.83" E	4.47	1062	867.136	1,223.281
1062	1063	S 67°09'02.94" E	5.76	1063	864.898	1,228.592
1063	1064	S 71°15'53.54" E	24.48	1064	857.035	1,251.774
1064	1065	S 75°22'25.01" E	6.26	1065	855.456	1,257.827
1065	1066	S 78°20'30.69" E	6.29	1066	854.185	1,263.984
1066	1067	S 80°14'04.96" E	8.98	1067	852.662	1,272.834
1067	1068	S 78°01'58.80" E	5.99	1068	851.421	1,278.690
1068	1069	S 83°39'56.25" E	4.44	1069	850.931	1,283.104
1069	1070	S 82°49'17.14" E	47.69	1070	844.972	1,330.418
1070	1071	S 81°19'29.29" E	5.02	1071	844.214	1,335.383
1071	1072	S 72°20'10.80" E	5.97	1072	824.404	1,341.067
1072	1073	S 57°34'01.62" E	2.62	1073	841.000	1,343.277
1073	1074	S 46°55'24.20" E	5.56	1074	837.200	1,347.341
1074	1075	S 30°51'03.61" E	5.59	1075	832.403	1,350.206
1075	1076	S 15°09'31.12" E	5.48	1076	827.112	1,351.640
1076	1077	S 01°08'44.75" E	2.75	1077	824.367	1,351.695
1077	1078	S 06°21'50.41" W	2.68	1078	821.701	1,351.397
1078	1079	S 11°42'21.59" W	8.85	1079	813.036	1,349.602
1079	1080	S 24°30'49.46" W	11.08	1080	802.956	1,345.005
1080	1081	S 40°24'00.61" W	9.88	1081	795.432	1,338.601
1081	1082	S 55°59'10.52" W	10.14	1082	789.757	1,330.193
1082	1083	S 75°08'00.04" W	14.20	1083	786.114	1,316.468
1083	1084	S 86°23'15.50" W	13.75	1084	785.247	1,302.745
1084	1085	S 85°59'57.63" W	13.53	1085	784.304	1,289.252
1085	1086	S 85°03'02.71" W	29.82	1086	781.731	1,259.548
1086	1087	S 84°37'42.60" W	5.74	1087	781.194	1,253.830
1087	907	N 45°43'44.09" W	64.62	907	826.303	1,207.558
SUPERFICIE = 9,419.911 m2						

Para sustento de la iniciativa se anexan los siguientes documentos:

De la CMIC:

- Oficio por el que solicita al Gobierno del Estado la reposición del inmueble enajenado.
- Nombramiento del Titular de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción delegación Zacatecas

Del inmueble:

- Certificado de libertad de gravamen expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
- Documento que contiene la inscripción de un polígono de 11-11-55.82 hectáreas a nombre del Gobierno del Estado, mismo que se encuentra dado de alta en el número 134, folio 51 del Volumen 90 de Escrituras Públicas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio derivado del Acuerdo expropiatorio publicado en el Periódico Oficial número 87 de fecha 29 de octubre de 1983.
- Avalúo Catastral de la superficie de 9,419.911 metros cuadrados, expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
- Avalúo Comercial expedido por la Especialista en Valuación de Inmuebles, Arq. Paula Bernal Díaz.
- Dictamen expedido por el Secretario de Infraestructura, en el que se determina que dicho inmueble no tiene valor arqueológico, histórico o artístico que sea necesario preservar ni está ni estará destinado a un servicio público estatal o municipal.
- Plano individual del predio con superficie de 9,419.911 metros cuadrados."

RESULTANDO TERCERO.- Se adjunta a la solicitud la siguiente documentación:

- ❖ Acta escritura pública que contiene la inscripción de un polígono de 11-11-55.82 hectáreas a nombre del Gobierno del Estado, del que se desmembrará el inmueble materia del presente Instrumento con superficie de 9,419.911 metros cuadrados, dado de alta en el número 134, folio 51 del Volumen 90 de Escrituras Públicas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio derivado del Acuerdo expropiatorio publicado en el Periódico Oficial número 87 de fecha 29 de octubre de 1983;
- ❖ Certificado número 051374 expedido por la Dirección de Catastro y Registro Público de Gobierno del Estado, en el sentido de que en un lapso de veinte años anteriores a la fecha, se encuentra libre de gravamen, predio con superficie de 11-11-55.82 hectáreas a nombre de Gobierno del Estado;
- ❖ Plano del bien inmueble;

- ❖ Avalúo catastral del inmueble, que asciende a la cantidad de \$9'090,214.115 (nueve millones noventa mil doscientos catorce pesos 115/00 M.N.);
- ❖ Avalúo comercial expedido por la Arquitecta Paula Bernal Díaz, en el que le asignan al inmueble un valor de \$18'500,000.00 (dieciocho millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.);
- ❖ Oficio número 1826, de fecha 3 de septiembre de 2014, expedido por el Ingeniero Mario Rodríguez Márquez, Secretario de Infraestructura de Gobierno del Estado, en el que informa que el bien inmueble que es materia del expediente, no tiene valor arqueológico, histórico o artístico que sean necesario preservar, ni tampoco está ni estará destinado a un servicio público estatal o municipal;
- ❖ Escritura número mil seiscientos diecisiete, Volumen número treinta y dos, de fecha 6 de marzo de 2015, en la que el Licenciado Modesto Barragán Romero, Notario Público del Patrimonio Inmobiliario Federal número Ciento Treinta y Cinco de Zitácuaro, Michoacán, hace constar la Protocolización del Acta de la Asamblea Ordinaria de Afiliados adscritos a la circunscripción de la Delegación Zacatecas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que otorgan al Arq. Francisco Carrillo Pasillas como presidente del Comité Directivo entrante del periodo 2015-2017. En los antecedentes de la escritura, en el número A se cita que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de junio de 1968, se constituyó la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, con domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal, con el objeto de representar los intereses generales de la industria de la construcción en la República Mexicana. En el antecedente número D de la escritura se hace constar el cambio de denominación a Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, publicado en

el Diario Oficial de la Federación del día 1 de diciembre de 1989;

- ❖ Copia del Suplemento 2 al Número 83 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al día 16 de octubre de 2010, que contiene el Decreto No. 544 mediante el cual se autoriza al Ejecutivo del Estado, para enajenar un bien inmueble a favor del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción A. C.

CONSIDERANDO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65 fracción V, 133 fracción II y 143 apartado B, de la Constitución Política del Estado; 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 33 fracción II de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios, es facultad de la Legislatura del Estado, abrogar un decreto, así como aprobar la enajenación y gravamen de bienes inmuebles propiedad del Estado.

CONSIDERANDO SEGUNDO.- En reunión de trabajo de la Comisión Dictaminadora, celebrada en fecha 01 de septiembre de 2015, compareció la parte donataria por conducto del C. Arquitecto Francisco Carrillo Pasillas, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Delegacional en Zacatecas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a quien le fue formulada la propuesta de realizar un área común de convivencia y deportiva en beneficio de los habitantes del Fraccionamiento Residencial del Valle, en el predio donde será construido el Centro de Formación Especializada y el Instituto Tecnológico de la Construcción materia de este Instrumento, habiéndose aceptado de conformidad la petición, por lo que los diputados integrantes de la Comisión dieron por concluidos los trabajos de dictamen en fecha 10 de septiembre del presente.

CONSIDERANDO TERCERO.- De conformidad con las constancias que obran en el expediente, se acredita que el inmueble descrito en Punto Tercero de la Exposición de Motivos de este Instrumento Legislativo, forma parte del patrimonio del Gobierno del Estado, por lo que esta Asamblea Popular, autoriza abrogar el contenido y consecuencias jurídicas del Decreto No. 544 expedido por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, en el que se enajenó en calidad de donación un bien inmueble a favor de la persona jurídica colectiva denominada Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción A. C. (ICIC) con destino a la construcción del Centro de Formación Especializada (CEFES). Lo anterior, toda vez que al no haberse concretado la formalización de la enajenación del Decreto 544, y asimismo, autoriza la sustitución del inmueble enajenado por otro ubicado entre las Calzadas Solidaridad y de los Deportes a favor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Con ello, se confirma el apoyo al sector educativo y científico de fomentar la creación de capacidades internas para la innovación en áreas estratégicas para el desarrollo estatal y regional en beneficio de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 140 y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del Pueblo es de Decretarse y se

DECRETA

PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Ejecutivo del Estado, a enajenar en calidad de donación a favor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, un inmueble ubicado entre las Calzadas Solidaridad y de los Deportes de esta Ciudad Capital, cuya descripción, medidas, colindancias, condición y destino han quedado precisados en el Punto Tercero de la Exposición de Motivos y Considerando Segundo de este Instrumento Legislativo.

SEGUNDO.- Por las razones y consideraciones jurídicas señaladas, se abroga el Decreto No. 544, por el que la Quincuagésima Novena Legislatura en fecha primero de septiembre de 2010, autorizó al Ejecutivo del Estado, para enajenar un bien inmueble a favor del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción A. C., mismo que fuera publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, el 16 de octubre del mismo año.

TERCERO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo celebrar contrato de donación respecto del bien inmueble materia del presente decreto, el cual será destinado a la construcción del Centro de Formación Especializada y el Instituto Tecnológico de la Construcción. El predio señalado sustituye al que le fuera donado mediante Decreto No. 544.

CUARTO.- La enajenación en calidad de Donación que se somete a autorización y el plazo de ejecución del proyecto destino señalado en el presente Instrumento Legislativo no excederá de tres años contados a partir de la vigencia de este Decreto. De no cumplirse en los términos de lo anterior, operará la reversión del predio a favor del patrimonio del Estado. Así deberá estipularse en las operaciones contractuales que al efecto se celebren.

QUINTO.- Los gastos que se originen con motivo del traslado de dominio, correrán a cargo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

SEXTO.- Notifíquese a quien corresponda y publíquese el presente Decreto por una sola vez, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN

DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil quince. **Diputado Presidente.- DIP. CARLOS ALBERTO PEDROZA MORALES. Diputados Secretarios.-DIP. IRENE BUENDÍA BALDERAS y DIP. MARIO CERVANTES GONZÁLEZ.- Rúbricas.**

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.

DADO en el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los dos días del mes de octubre de dos mil quince.

A t e n t a m e n t e.

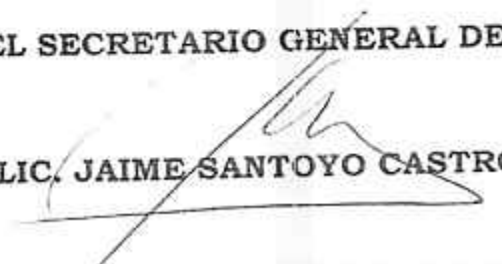
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS



LIC. MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JAIME SANTOYO CASTRO.

ACUERDO A/02/2015 DE LA C. DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA, PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, POR EL QUE SE EMITE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.

Con fundamento en los artículos 21 párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 fracción XIV, 256, 257 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 3º, 8º, 9º, fracciones II, V y XVIII, 21 fracción IV y 27 fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el cinco de marzo del año dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé las formas de terminación anticipada al procedimiento penal.

Mediante decreto número 215, de fecha 30 del mes de octubre del año 2014, de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, declara que el Estado de Zacatecas incorpora a su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, el que entrará en vigor de manera progresiva y por distritos judiciales, de conformidad con las siguientes consideraciones:

I.- A las cero horas del día cinco de enero del dos mil quince, en los Distritos Judiciales de Zacatecas, Calera, Ojocaliente, Villanueva, Jalpa, Juchipila, Nochistlán de Mejía, Tlaltenango de Sánchez Román, Teúl de González Ortega, Jerez, Valparaíso, Miguel Auza, Concepción del Oro y Río Grande.

II.- A las cero horas del día cuatro de enero del dos mil dieciséis para los Distritos Judiciales de Pinos, Loreto, Sombrerete y Fresnillo.

SEGUNDO.- A partir de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del mes de junio del año dos mil ocho, así como las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, se han dispuesto los principios que establecen las bases para ejercer un sistema de enjuiciamiento penal acusatorio y oral, y se incorporan mecanismos de selección de casos para privilegiar la eficacia, calidad y la racionalización de recursos en la persecución penal. Los principios constitucionales relativos a la persecución penal, establecen que en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público deberá observar siempre el principio de legalidad, por lo que si en el caso concreto se reúnen los requisitos legales para ello, debe ejercer la acción penal correspondiente, es decir, dispone como regla general la obligatoriedad de la persecución penal de cara a la acusación y posterior juicio.

TERCERO.- No obstante, por razones estrictamente de política de persecución penal en el ejercicio de esta potestad, el Ministerio Público podrá aplicar de manera excepcional ciertos criterios para prescindir, suspender o limitar, sólo a ciertos hechos o a determinadas personas, la persecución penal.

La calidad y eficacia del sistema de justicia penal debe ser el hilo conductor de la implementación del sistema acusatorio y oral. En este sentido, la selección de casos por

parte del Ministerio Público se concibe como un instrumento que posibilita efficientar recursos para optimizar la investigación de los delitos y del propio proceso penal.

En este sentido el objetivo de estos lineamientos es establecer reglas para prescindir de la investigación o persecución frente a casos en los cuales, ordinariamente, debería ejercitarse acción penal por un aparente hecho delictivo. Se trata justamente, de conducir la selección de casos en forma racional a partir de criterios institucionales perfectamente establecidos, basados en una clara política de persecución penal, con la posibilidad de ejercer un control y exigir responsabilidades en quienes la aplican, para alcanzar la eficiencia del sistema frente a hechos más relevantes y de mayor gravedad social. Lo anterior, al facilitar la concentración de los órganos de investigación, persecución y jurisdiccionales en las conductas más lesivas para la comunidad y los ciudadanos.

Por lo anterior, se determina el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Se establecen los lineamientos institucionales para la aplicación de los criterios de oportunidad de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 131 fracción XIV, 256, 257 y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

SEGUNDO.- Iniciada la investigación, previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma y realizada de la valoración de las circunstancias especiales en cada caso, el Ministerio Público ponderará el ejercicio de la acción penal sobre la base de criterios de oportunidad siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido o ésta manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación de lo cual deberá dejarse constancia en la carpeta de investigación.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la aplicación de los criterios de oportunidad será procedente desde el inicio de la investigación hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, en cualquiera de los siguientes supuestos:

- I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia;
- II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares;
- III. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psico-emocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena;
- IV. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta al inculpado por otro delito, o la que podría aplicarse al mismo por otros delitos o bien, por la pena que previamente se le haya impuesto o podría llegar a imponerse en virtud de diverso proceso tramitado en otro fuero;
- V. Cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio. En estos supuestos, los

efectos del criterio de oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio;

VI. Cuando la afectación al bien jurídico tutelado resulte poco significativa, y

VII. Cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines preventivos de la política criminal.

No obstante, deberán observarse las pautas generales que a continuación se disponen para su aplicación. De igual manera, no podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, violencia familiar, ni en aquellos que afecten gravemente el interés público.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 9 fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se faculta a la Licenciada Juana Medina García, Subprocuradora de Control, Justicia Alternativa y Capacitación, para autorizar según proceda la aplicación de criterios de oportunidad.

Políticas generales de aplicación:

1. El Agente del Ministerio Público, al momento de decidir sobre la aplicación de un criterio de oportunidad, debe realizar una valoración integral de la denuncia y de los demás elementos de información con los que cuente la carpeta de investigación.
- 2.- Que al imputado no se le haya aplicado un criterio de oportunidad en cualquier fuero durante los cinco años anteriores.
3. Cuando se decida por un criterio de oportunidad se hará sobre una base objetiva y sin discriminación efectuando el análisis correspondiente acorde a lo dispuesto en el presente acuerdo.
4. La decisión del Agente del Ministerio Público que aplique un criterio de oportunidad, deberá estar fundada y motivada, y será comunicada por escrito a la Licenciada Juana Medina García, Subprocuradora de Control, Justicia Alternativa y Capacitación, a fin de que verifique que la misma se ajusta a las políticas y lineamientos institucionales, y que resulta procedente su autorización.
5. En todos los casos previstos en el artículo 256 el Agente del Ministerio Público, titular de la carpeta de investigación, deberá dar aviso a la C. Dra. Leticia Catalina Soto Acosta, Procuradora General de Justicia del Estado, para el registro correspondiente de las determinaciones de no ejercicio a partir de la aplicación de los criterios.
6. El Agente del Ministerio Público titular de la de investigación, será responsable de verificar que se lleve el registro de las carpetas de investigación en los que se aplicó algún criterio de oportunidad, y los presupuestos en los que se fundamentó cada uno de ellos.
7. Cuando la aplicación del criterio de oportunidad sea autorizada por la Licenciada Juana Medina García, Subprocuradora de Control, Justicia Alternativa y Capacitación, inmediatamente después se notificará a la víctima u ofendido, y se le informará que podrá impugnar dicha decisión ante el Juez de Control, según lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos penales.

CUARTO.- Lineamientos específicos para cada supuesto contenido en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

1.- Se trate de un delito que no se haya cometido con violencia y que:

- a. No tenga pena privativa de libertad,
- b. Tenga pena alternativa, o
- c. Tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión.

1.1. Se deberá verificar que al interior de la carpeta de investigación exista información que permita establecer razonablemente que se trata de un delito cometido sin violencia y cuya pena se encuentre dentro de los parámetros establecidos en los supuestos anteriores, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes.

1.2. Corroborar, que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido, y dejar constancia de ello en la carpeta de investigación.

1.3. En caso de que no se haya reparado o garantizado los daños a la víctima u ofendido, pero exista manifestación expresa por parte de ésta de su falta de interés jurídico en dicha reparación, deberá dejarse constancia en la carpeta de investigación.

2. Se trate de delitos:

- a. De contenido patrimonial, o
- b. Delitos cuiposos.

2.1. Justificar que al interior de la carpeta de investigación exista información que permita establecer razonablemente que se trata de un delito de los contenidos en los supuestos anteriores.

2.2. Verificar que respecto al delito de contenido patrimonial exista información en la carpeta de investigación que permita establecer razonablemente que el imputado lo cometió sin ejercer violencia física o moral sobre las personas.

2.3. No procede respecto de delitos patrimoniales cuyo monto exceda de doscientas cincuenta cuotas.

2.4. Comprobar que respecto al delito culposo exista información en la carpeta de investigación que permita establecer razonablemente que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares.

2.5. Corroborar que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido, y dejar constancia de ello en la carpeta de investigación.

2.6. En caso de que no se haya reparado o garantizado los daños a la víctima u ofendido, pero exista manifestación expresa por parte de ésta de su falta de interés jurídico en dicha reparación, deberá dejarse constancia en la carpeta de investigación.

3. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo:

- a. Un daño físico o psico-emocional grave,
- b. o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal.

El objetivo de este supuesto es evitar que de manera innecesaria se active la operación judicial de análisis de los hechos. Este criterio tiende a la descriminalización del hecho en atención a la ausencia de necesidad preventiva o retribución natural. Esto es, que no

existe la necesidad de procesar a una persona si ya ha sufrido mas por el resultado de su conducta que por la propia sanción que se le pudiera imponer.

3.1. Verificar en su caso, que al interior de la carpeta de investigación exista el dictamen pericial respectivo que permita establecer razonablemente que el imputado a consecuencia directa del hecho que se investiga sufrió un daño físico o psico-emocional grave.

3.2. Una vez acreditado que el imputado sufre un daño físico o psico-emocional grave, realizar una proyección de la posible pena a imponer con base en los parámetros establecidos respecto a la individualización de sanciones en el Código Penal respectivo, y una vez definida ésta, determinar si la misma es notoriamente innecesaria o desproporcional en atención al daño sufrido.

3.3. Verificar en su caso, que al interior de la carpeta de investigación exista el dictamen pericial respectivo que permita establecer razonablemente que el imputado ha contraído una enfermedad terminal.

3.4. Una vez acreditado que el imputado ha contraído una enfermedad terminal, realizar una proyección de la posible pena a imponer con base en los parámetros establecidos a la individualización de sanciones en el Código Penal respectivo, y una vez definida ésta, determinar si la misma es notoriamente innecesaria o desproporcional en atención a la propia enfermedad.

3.5. Corroborar en su caso, que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido, y dejar constancia de ello en la carpeta de investigación.

3.6. En caso de que no se haya reparado o garantizado los daños a la víctima u ofendido, pero exista manifestación expresa por parte de esta de su falta de interés jurídico en dicha reparación, deberá dejarse constancia en la carpeta de investigación.

4. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad:

- a. Ya impuesta al inculcado por otro delito,
- b. Que podría aplicarse al propio inculcado por otros delitos,
- c. Que previamente se le haya impuesto en virtud de diverso proceso tramitado en otro fuero, o
- d. Que podría llegar a imponérsele en virtud de diverso proceso tramitado en otro fuero.

Este criterio dispone la posibilidad de prescindir de la persecución penal del hecho delictivo que se investiga cuando la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse en los supuestos anteriores carezca de importancia, aquí se subsume la pena menor dentro de la mayor, es decir, contempla aquellos casos en que el imputado se le haya impuesto una sanción tan grave o haya cometido un hecho en la cual se espera imponer una sanción tan severa, que con respecto a los restantes hechos o infracciones no existe interés de sanción para el sistema penal y por lo tanto prescindir de la persecución penal. Para lo cual, el Ministerio Público necesariamente debe revisar los antecedentes penales, las penas impuestas, y cuanto tiempo debe descontar el inculcado, además, de analizar los hechos pendientes al juzgamiento y con ello determinar la pena que se impondrá en dado caso, atendiendo a los criterios de individualización de la pena previstos en el libro primero, título tercero relativo a la aplicación de las sanciones del Código Penal del Estado.

4.1. Verificar en su caso, que al interior de la carpeta de investigación del hecho por el cual se pretenda prescindir de la persecución penal, exista información que:

a) El imputado ya ha sido condenado por otro delito y está cumpliendo la pena o medida de seguridad respectiva.

b) Verificado lo anterior, realizar una proyección de la posible pena a imponer por el hecho delictivo que se pretende prescindir de la persecución penal con base en los parámetros establecidos en el libro primero, título tercero, relativo a la aplicación de las sanciones del Código Penal del Estado, y ponderar si la misma carece de importancia con la pena o medida de seguridad que está cumpliendo.

4.2. El imputado está siendo procesado por otro(s) delito(s) y existe la posibilidad de que pueda aplicársele una pena o medida de seguridad con motivo de éste(s).

a) Verificado lo anterior, realizar una proyección de la posible pena a imponer por el hecho delictivo que se pretende prescindir de la persecución penal con base en los parámetros establecidos en el libro primero, título tercero relativo a la aplicación de las sanciones del Código Penal del Estado, y ponderar si la misma carece de importancia con la pena o medida de seguridad que podría aplicársele por dicho(s) delito(s) diverso(s).

4.3. El imputado ya ha sido condenado por otro(s) delito(s) en virtud de diverso(s) proceso(s) tramitado(s) en otro fuero y está cumpliendo la pena o medida de seguridad respectiva.

a) Verificado lo anterior, realizar una proyección de la posible pena a imponer por el hecho delictivo que se pretende prescindir de la persecución penal con base en los parámetros establecidos en el libro primero, título tercero relativo a la aplicación de las sanciones del Código Penal del Estado, y ponderar si la misma carece de importancia con la pena o medida de seguridad que está cumpliendo, en virtud de diverso proceso tramitado en otro fuero.

4.4. El imputado está siendo procesado por otro(s) delito(s) en virtud de diverso(s) proceso(s) tramitado(s) en otro fuero y existe la posibilidad de que pueda aplicársele una pena o medida de seguridad con motivo de éste(s).

a) Verificado lo anterior, realizar una proyección de la posible pena a imponer por el hecho delictivo que se pretende prescindir de la persecución penal con base en los parámetros establecidos en el libro primero, título tercero relativo a la aplicación de las sanciones del Código Penal del Estado, y ponderar si la misma carece de importancia con la pena o medida de seguridad que podría aplicársele por dicho(s) delito(s) diverso(s) en virtud de diverso(s) proceso(s) tramitado(s) en otro fuero.

Establecer en cualquiera de los supuestos anteriores, que la posible pena a imponer por el hecho que se pretende prescindir de la persecución penal es menor o carece de importancia con la ya impuesta por otros delitos, la que podría llegar a aplicársele por diversos delitos; o la ya impuesta o la que podría llegar a imponérsele en diverso proceso tramitado en otro fuero.

Corroborar en su caso, que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido respecto de los hechos por los cuales se pretende prescindir de la persecución penal, y dejar constancia de ello en la carpeta de investigación.

En caso de que no se haya reparado o garantizado los daños a la víctima u ofendido, pero exista manifestación expresa por parte de ésta de su falta de interés jurídico en dicha reparación respecto de los hechos por los cuales se pretende prescindir de la persecución penal, deberá dejarse constancia en la carpeta de investigación.

5. Cuando el imputado:

- a) Aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa;
- b) La información que proporcione derive en la detención de un imputado diverso, y
- c) Se comprometa a comparecer en juicio.

Para la aplicación de este criterio de oportunidad es necesario que se cumplan las tres condiciones que se detallan y conlleva de forma implícita la existencia de una estrategia de investigación y persecución penal previamente establecida, tendiente a combatir la criminalidad no convencional. Es preciso destacar que el objetivo no es solo obtener declaraciones de imputados o coimputados, sino que estos proporcionen información veraz, útil, pertinente y legal que permita:

- El esclarecimiento de hechos delictivos más graves que los hechos delictivos por los cuales se pretende prescindir la persecución penal en favor del imputado, o
- La aprehensión y enjuiciamiento de otro(s) imputado(s) cuya participación es (sea) mayor en los mismos hechos delictivos o en otros más graves.

Para lo cual deberá:

1). Verificar que la información que se pretende proporcionar por parte del imputado a cuyo favor se aplicará el criterio de oportunidad:

- a) Se trate de delito(s) más grave(s) que los hechos delictivos por los cuales se le investiga, o
- b) Su participación sea menor en ese(s) mismo(s) hecho(s).

En este caso, se deberá realizar un análisis de la participación del imputado con base en lo dispuesto en el Código Penal del Estado, para establecer si efectivamente su participación es menor. Se deberá establecer con exactitud que el imputado que pretende colaborar con la investigación, no sea el autor intelectual o directo del hecho delictivo, que aporta información para la aprehensión y enjuiciamiento de simples colaboradores con una actuación limitada.

2). En el caso de que la aplicación del criterio de oportunidad se ofrezca por su colaboración en delitos más graves, estos se determinarán con base en la ponderación que se deberá de efectuar entre los hechos por los cuales se pretende prescindir la persecución penal en favor del imputado y los hechos delictivos en los cuales aporta información para su esclarecimiento, tomando en cuenta el bien jurídico tutelado según su importancia e impacto social.

3). Es necesario que contra el imputado que pretende colaborar, exista dentro de la investigación información o elemento probatorio alguno que permita establecer razonablemente su participación en el hecho(s) delictivo que se investiga(n).

4). Previo a la aplicación del criterio de oportunidad es indispensable que se verifique si la información suministrada por parte de la persona a la cual se le aplicará el criterio de oportunidad:

- 4.1. Era ya conocida por la autoridad,
- 4.2. Es verdadera, útil, pertinente y suficiente;
- 4.3. Es esencial para el esclarecimiento de hechos delictivos más graves o para la aprehensión y enjuiciamiento de otros imputados cuya participación sea mayor,
- 4.4. No tenga el propósito de obstaculizar o dilatar la investigación y/o el proceso.

5). Si la colaboración consiste en información falsa, o es proporcionada con el propósito de obstaculizar la investigación, el Ministerio Público deberá de reanudar el procedimiento penal ordinario.

6). Es obligación del Ministerio Público llevar un control estricto en la aplicación de este criterio de oportunidad, evitando la utilización de cualquier coacción que lleve al imputado a tomar una decisión en contra de su voluntad.

7). Una vez verificada la procedencia de la aplicación del presente criterio de oportunidad con base en las políticas que anteceden, se hará el planteamiento en un inicio de forma verbal entre el Ministerio Público, el imputado y su defensor. En dicho planteamiento podrá intervenir el(los) agente(s) de la Policía Ministerial encargado(s) de la investigación para corroborar la novedad, veracidad, integridad, utilidad, pertinencia, suficiencia y confiabilidad de la información proporcionada, y de su trascendencia para la investigación.

8). Una vez verificada la información proporcionada, el Policía Investigador o Ministerial dejará registro de dicha información en el acta respectiva, la cual contendrá minimamente los siguientes datos: fecha, lugar, nombre del Agente del Ministerio Público, del Policía Ministerial, del imputado a cuyo favor se pretende aplicar el criterio de oportunidad, de su Defensor, la información proporcionada y verificada, y los efectos del criterio de oportunidad a otorgar. No obstante, si el planteamiento no prospera o no alcanza los fines propuestos, la información obtenida no podrá ser utilizada dentro del procedimiento penal.

9). Corroborar en su caso, que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido respecto de los hechos por los cuales se pretende prescindir de la persecución penal, y dejar constancia de ello en la carpeta de investigación.

10). En caso de que no se haya reparado o garantizado los daños a la víctima u ofendido, pero exista manifestación expresa por parte de ésta de su falta de interés jurídico en dicha reparación respecto de los hechos por los cuales se pretende prescindir de la persecución penal, deberá dejarse constancia en la carpeta de investigación.

6. Cuando la afectación al bien jurídico tutelado resulte poco significativa:
Tratándose de casos de amenazas simples sin riesgos; calumnias momentáneas, daño en las cosas en cuantía mínima de menos de cien cuotas, siempre que se cubra el daño, en robos de cuantía menor a cien cuotas por necesidad, en delitos cuya pena sea alternativa y menor a tres años de prisión.

Así, una vez definidos estos hechos delictivos, cuya afectación al bien jurídico es susceptible de ser considerada poco significativa, el Ministerio Público deberá tomar en consideración el valor del bien jurídico tutelado, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados y las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho y la forma de intervención del imputado en la comisión del delito, y deberá además:

6.1. Corroborar que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido, y dejar constancia de ello en la carpeta de investigación.

6.2. En caso de que no se haya reparado o garantizado los daños a la víctima u ofendido, pero exista manifestación expresa por parte de ésta de su falta de interés jurídico en dicha reparación, deberá dejarse constancia en la carpeta de investigación.

7. Cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines preventivos de la política criminal:

- a) Se deberá observar que no sea de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa;
- b) Que se establezca que el imputado no implica un riesgo en la seguridad de la víctima u ofendido, o de la sociedad;
- c) Que en razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal; además

7.1. Corroborar que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido, y dejar constancia de ello en la carpeta de investigación.

7.2. En caso de que no se haya reparado o garantizado los daños a la víctima u ofendido, pero exista manifestación expresa por parte de ésta de su falta de interés jurídico en dicha reparación, deberá dejarse constancia en la carpeta de investigación.

Efectos de la aplicación de los criterios de oportunidad:

1. La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o participe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio. Para lo cual será necesario que el Ministerio Público emita la determinación respectiva en la cual establezca el no ejercicio de la acción penal a consecuencia de la aplicación del criterio de oportunidad.

2. Si la decisión del Ministerio Público se sustentara en alguno de los supuestos establecidos en las fracciones I y II del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sus efectos se extenderán a todos los imputados que reúnan las mismas condiciones.

3. En el caso del supuesto contenido en la fracción V del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio en los términos de la información proporcionada, corroborada y validada. En este sentido, se suspenderá el ejercicio de la acción penal en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó el criterio de oportunidad hasta quince días naturales después de que quede firme la declaración judicial de extinción penal, momento en que el Juez de control a solicitud del agente del Ministerio Público, deberá resolver definitivamente sobre la extinción de la acción penal. Así también, se suspenderá el plazo de la prescripción de la acción penal durante la víspera de la declaración del imputado beneficiado en el juicio respectivo.

QUINTO.- En razón de los supuestos no enunciados y que la víctima u ofendido estén de conformidad mediante comparecencia, puede aplicarse el criterio de oportunidad, siempre que se emita la determinación correspondiente con motivación y fundamento legal, que se remita para la autorización respectiva.

De la responsabilidad en el incumplimiento u omisión de aplicar los lineamientos del criterio de oportunidad.

a).- La aplicación de los criterios de oportunidad es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan que resolver lo conducente.

b).- La inobservancia de los lineamientos generales, de la aplicación de criterios de oportunidad, es responsabilidad de los servidores públicos de la Institución, los hará acreedores a las sanciones establecidas por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Zacatecas y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Segundo.- Las Subprocuradurías y Coordinación Administrativa proveerán lo conducente a efecto de implementar y vigilar la aplicación del presente acuerdo.

Zacatecas, Zac, a los quince días del mes de Octubre del año 2015.

LA C. PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO


DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA.

ACUERDO A/03/2015 DE LA C. DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA, PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, POR EL QUE SE EMITE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.

Con fundamento en los artículos 20 apartado A, fracción VII y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131 fracción XVIII, 183, 185, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 418 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 3º, 8º, 9º, fracciones II, V y XVIII, 21 fracción IV y 27 fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el cinco de marzo del año dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé las formas de terminación anticipada al procedimiento penal.

Mediante decreto número 215, de fecha 30 del mes de octubre del año 2014, la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, declara que el Estado de Zacatecas incorpora a su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, el que entrará en vigor de manera progresiva y por distritos judiciales, de conformidad con las siguientes consideraciones:

I.- A las cero horas del día cinco de enero del dos mil quince, en los Distritos Judiciales de Zacatecas, Calera, Ojocaliente, Villanueva, Jalpa, Juchipila, Nochistlán de Mejía, Tlaltenango de Sánchez Román, Teúl de González Ortega, Jerez, Valparaíso, Miguel Auza, Concepción del Oro y Río Grande.

II.- A las cero horas del día cuatro de enero del dos mil dieciséis en los Distritos Judiciales de Pinos, Loreto, Sombrerete y Fresnillo.

SEGUNDO.- A partir de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del mes de junio del año dos mil ocho, así como las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, se han dispuesto los principios que establecen las bases para un sistema de enjuiciamiento penal acusatorio y oral, y se incorporan mecanismos de selección de casos para privilegiar, la eficacia, calidad y la racionalización de recursos en la persecución penal. Los principios constitucionales relativos a la persecución penal, establecen de que en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público deberá observar siempre el principio de legalidad, por lo que si en el caso concreto se reúnen los requisitos legales se debe ejercer la acción penal correspondiente; es decir, se dispone como regla general la obligatoriedad de la persecución penal de cara a la acusación y posterior juicio. No obstante, por razones estrictamente de política pública de persecución penal, el Ministerio Público podrá pugnar por una forma anticipada de terminación del proceso mediante la aplicación del procedimiento abreviado.

TERCERO.- El procedimiento abreviado contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales es un mecanismo que simplifica la estructura del procedimiento

penal ordinario, para obtener en un tiempo razonable, con un despliegue menor de recursos por parte de la institución del Ministerio Público y a partir de decisiones estratégicas dentro la investigación, una sentencia que bajo la visión social resulte aceptable tanto en función del tiempo, como en la percepción de celeridad y eficacia del sistema de justicia penal. En este sentido, el procedimiento abreviado se convierte en una herramienta, para una persecución penal eficaz y de rentabilidad social que se justifica al presentar una mejor relación costo-beneficio. Además, de este razonamiento, con el procedimiento abreviado se potencializa una mayor efectividad en la actividad de investigación y persecución por parte del Ministerio Público, a la par de la consecución de sentencias condenatorias socialmente óptimas, entendidas como aquellas que se hubieren obtenido en un juicio completo.

Este mecanismo, permita que el ministerio público se enfoque en la persecución penal de hechos de mayor impacto, y deja para el propio procedimiento abreviado casos en los cuales no exista debate y, por tanto, se genere en corto plazo una sentencia, sin la necesidad de continuar con el esfuerzo técnico y humano dentro de la investigación o en las distintas audiencias hasta juicio. Con ello se dejan de lado delitos de menor significación que podrán ser solventados a través de soluciones alternas o la desestimación total en investigaciones sin ninguna perspectiva de éxito, esto, ante la imposibilidad real de enjuiciar todos los casos conforme a las reglas del procedimiento ordinario y su conclusión en un juicio oral.

De esta forma se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales, una forma de terminación anticipada que implica un acuerdo previo entre la defensa y el ministerio público sobre la pena a imponer, regulado a través del procedimiento abreviado, es decir, una posibilidad procesal para cuyo acceso se requiere de un acuerdo previamente establecido y la solicitud por parte del ministerio público, único facultado para solicitar su apertura, en aquellos casos en que no parezca necesario realizar un juicio oral debido a que no existe una controversia fundamental entre el ministerio público y el imputado respecto de los hechos de los cuales se le acusa.

Sin embargo, para la aplicación del procedimiento abreviado es preciso establecer lineamientos, criterios y controles que regulen la facultad discrecional que la Constitución y la ley otorgan al Ministerio Público, para que con transparencia y objetividad se realice el ofrecimiento y negociación de la pena, con base en las políticas institucionales de persecución penal orientadas a una investigación racional, estratégica e inteligente. Por lo anterior, se determina el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Se establecen los lineamientos institucionales para la aplicación del Procedimiento Abreviado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 131 fracción XVIII, 183, 185, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 9ª fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, bajo los siguientes puntos:

I.- Negociación previa al ofrecimiento de la pena por parte del Ministerio Público:

Para la optimización de la aplicación del procedimiento abreviado es imprescindible establecer una negociación previa con la contraparte con el fin de

determinar la pena que será solicitada en el procedimiento abreviado por parte del Ministerio Público.

No es óbice a lo anterior que, como presupuesto de la propia negociación, en cada caso debe existir una investigación científica, con suficiencia legal y probatoria que permita al Ministerio Público ofrecer un procedimiento abreviado que no implique una reducción arbitraria y poco razonada de la pena, lo que obliga al Ministerio Público a llevar a cabo una evaluación profunda de magnitud de la pena que en juicio se podría imponer al imputado en caso de ser condenado y de la etapa procesal en la cual se acepta el procedimiento abreviado.

Lo anterior, implica un proceso de interacción entre Ministerio Público y Defensa previo a la audiencia donde se solventará el procedimiento abreviado, en virtud del que se establece la pena a solicitar; para ello, se deben considerar las pautas generales que a continuación se establecen, bajo el principio de que lo que ha de negociarse es la magnitud de la pena, es decir, la punición que se solicitará dentro de la punibilidad prevista por el Código Penal para el tipo penal actualizado, la cuantía, la acusación, la evasión o absolución del imputado quedan fuera de toda negociación.

II.- Políticas generales para la aplicación del procedimiento abreviado:

Previo a la audiencia en la cual se admita y desarrolle el procedimiento abreviado, el ministerio público deberá negociar y acordar con la defensa, la cuantía de pena a solicitar en base a las siguientes consideraciones:

1. El procedimiento abreviado no implica que el Ministerio Público, por regla general, solicite la pena mínima o la reducción según se dispone en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, el monto de la pena a partir del cual se iniciará la negociación con la defensa, se establecerá con base en una proyección que se haga de ésta si el caso llegara a juicio, y se tomará en cuenta lo relativo a la individualización de sanciones del Código Penal.

2. La posible reducción responderá en todo caso, al momento procesal en el que se dé la aceptación del procedimiento abreviado y del caudal probatorio con el que cuente el ministerio público para sostener la acusación en juicio, entre otros aspectos, partiendo forzosa y necesariamente de la negociación sobre la posible pena a imponer en juicio, la que por tanto no será la mínima, sino se establecerá con base a las circunstancias particulares del caso y del imputado; menor reducción si el imputado ha sido condenado por delito doloso en el fuero federal o local; menor reducción si el delito amerita prisión preventiva oficiosa, y mayor reducción si el imputado aportó información que colaboró de forma eficaz a evitar la comisión de otro delito o en la investigación de otros imputados o delitos.

3. Se realizará un análisis y evaluación de los medios de prueba con los que cuenta el Ministerio Público dentro de la investigación, así como la disponibilidad de éstos en caso de ser necesario su presentación en juicio y del esfuerzo que se requiere para su desahogo en la audiencia de debate.

4. Definida la posible pena a imponer en juicio en el caso concreto y analizado los medios de prueba con los que cuenta el Ministerio Público para poder sustentar la acusación en juicio, se verificará el momento procesal en el que la defensa y el imputado acepten el procedimiento abreviado. Por lo que, la aceptación en la audiencia inicial generará una

mayor posibilidad de reducción de la pena, de lo que pudiera ofrecerse en momentos posteriores.

5. Una vez establecida la pena a solicitar con base en la negociación que para tal efecto se lleve a cabo con la defensa y el imputado, se informará detalladamente a la víctima; se le especificarán en su caso, los parámetros tomados en cuenta para la determinación del monto de la pena, y se realizará un comparativo de la pena que se solicitará en el procedimiento abreviado, con la que se pudiera imponer en juicio si el asunto concluyera de forma ordinaria.

6. En delitos de alto impacto que se señalan en el numeral siguiente se evaluará, si es el caso, la posibilidad de ofrecer una pena que implique la procedencia de un beneficio preliberacional, deberá evitarse que se genere una percepción de impunidad en caso de otorgarse.

7. En los casos iniciados por los delitos de asociación delictiva, homicidio, secuestro, extorsión, violación, abandono de familiares, trata de personas, feminicidio, abigeato, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos en materia electoral, delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental y delitos graves, se requerirá autorización por parte de la C. Procuradora General de Justicia del Estado, para el procedimiento abreviado.

8. En los casos de los supuestos no enunciados en el numeral anterior y que la víctima u ofendido estén informados, mediante comparecencia puede iniciarse la aplicación al procedimiento abreviado, una vez que se remita la solicitud y comparecencia, con motivación y fundamento legal, para la autorización con el C. Agente del Ministerio Público Adscrito al despacho de la C. Procuradora.

9. Será indispensable que antes del inicio del procedimiento abreviado se encuentre pagada o garantizada la reparación del daño a la víctima u ofendido.

10.- Las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos, también serán aplicables para la solicitud de pena en la aplicación de un procedimiento abreviado para personas jurídicas.

III.- De la responsabilidad en el incumplimiento u omisión de aplicar los lineamientos del procedimiento abreviado.

1.- La aplicación del Juicio Abreviado es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, tengan que resolver lo conducente, en los términos establecidos por la Ley.

2.- La aplicación de los lineamientos generales, para la aplicación del Procedimiento Abreviado es responsabilidad de los servidores públicos de la Institución, su inobservancia los hará acreedores a las sanciones establecidas por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Zacatecas y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Las Subprocuradurías y Coordinación Administrativa proveerán lo conducente a efecto de implementar y verificar la aplicación del presente acuerdo.

Zacatecas, Zac a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince.

LA C. PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO


DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA.

